FAX ORIGINAL

San José, 28 de julio de 2003

Dr. Manuel Ventura Robles
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presente

0000559

Ref.: Alfonso Martín del Campo Dodd

Distinguido Dr. Ventura:

Los representantes de las víctimas y sus familiares (en adelante, "los representantes") en el caso de la referencia tenemos a bien presentar a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, "la Corte") nuestras observaciones a la respuesta de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, "el Estado") a la demanda interpuesta por la CIDH en su contra, al igual que al escrito adicional presentado por los representantes, de acuerdo con el artículo 35.4 del reglamento de la Corte.

Como una cuestión preliminar, los representantes deseamos hacer notar el desafortunado tono, así como las imprecisiones vertidas por el Estado mexicano en el escrito de contestación de demanda, tanto respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de los representantes de las víctimas y sus familiares. No sobra decir que en todo momento nos hemos dirigido en el procedimiento internacional, tanto a la Comisión Interamericana como al Ilustre Estado mexicano de manera respetuosa y siempre en aras de alcanzar la justicia que le fue negada a nuestros representados.

Aclarado lo anterior, consideramos conveniente manifestar que, aun cuando los representantes estamos en desacuerdo con la mayor parte de los planteamientos del Estado, el presente documento se centrará en la discusión de las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Sin embargo, en vista de la relevancia de los puntos planteados en las otras secciones del escrito del Estado, solicitamos a la Honorable Corte que, de conformidad con el artículo 38 de su Reglamento en vigor¹, autorice a los peticionarios a presentar los argumentos tendentes a controvertir varios de los planteamientos de el Estado en las partes de hechos, fondo y reparaciones del escrito presentado el 5 de mayo pasado.

En este sentido, nos referiremos a las dos excepciones preliminares planteadas por el Estado², las cuales serán comentadas en el siguiente orden: a. En relación con la competencia de la Corte para

¹ El artículo 38 del Reglamento de la Honorable Corte señala:

Artículo 38. Otros actos del procedimiento escrito. Contestada la demanda y antes de la apertura del procedimiento oral, las partes podrán solicitar al Presidente la celebración de otros actos del procedimiento escrito. En este caso, si el Presidente lo estima pertinente, fijará los plazos para la presentación de los documentos respectivos.

² Según se desprende del documento presentado por el Estado, las excepciones interpuestas son las siguientes:

1) Falta de competencia de la Corte para conocer los hechos anteriores al 16 de diciembre de 1998; 2) La inobservancia de la Comisión Interamericana a las reglas básicas de tramitación de peticiones individuales previstas en la Convención Americana y en los Reglamentos aplicables; la falta de objetividad de la Comisión en las distintas etapas del procedimiento internacional; la afectación por parte de la CIDH al equilibrio procesal que derivó en la situación de indefensión que afectó al Estado mexicano durante la tramitación de la queja.

resolver el caso; b. Respecto del agotamiento de recursos internos en general; y c. En relación con el plazo para interponer el recurso.

0000560

I. RESPECTO DE LA PRIMER EXCEPCIÓN INTERPUESTA POR EL ESTADO MEXICANO, RELATIVA A LA COMPETENCIA DE LA HONORABLE CORTE

En su respuesta, el Estado mexicano refiere que la Honorable Corte carece de competencia para pronunciarse sobre hechos ocurridos antes del 16 de diciembre de 1998 (competencia *ratione temporis*) y que es igualmente incompetente para pronunciarse sobre las violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (competencia *ratione materiae*)

A. En relación con la competencia *ratione temporis* de la Honorable Corte

Tanto el Estado como la Comisión Interamericana y los representantes en este caso estamos de acuerdo en que la Honorable Corte es competente para conocer de hechos ocurridos con posterioridad a la aceptación, por parte del Estado, de la competencia contenciosa de este tribunal, la cual empezó a surtir sus efectos a partir del día 16 de diciembre de 1998³.

Los representantes en este caso sostenemos que todos los derechos contenidos en nuestro escrito adicional⁴ a la demanda de la Comisión son violaciones o actos ilícitos continuados.

No obstante lo anterior, la violación a la integridad personal que ha sufrido Alfonso Martín del Campo Dodd obliga a que el análisis que la Corte realice sea abordado desde otra perspectiva: la de los efectos continuados. En efecto, los actos de los cuales se valieron diversos funcionarios policiales mexicanos el 30 de mayo de 1992 para propinarle a nuestro representado un trato coincidente con la definición de tortura, aunque severo, fue instantáneo. No así los efectos que este trato dejó en él.

La tortura es uno de los actos más aberrantes contra la dignidad humana⁵, no sólo porque en sí misma está concebida para doblegar la voluntad de la persona, sino también porque en muchas

³ Ver Demanda presentada el 30 de enero de 2003 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los Estados Unidos Mexicanos relativa al caso 12.228, Alfonso Martín del Campo Dodd (en adelante, "Demanda de la Comisión"), Párr. 11, *in fine*; Escrito de los representantes de Alfonso Martín del Campo Dodd y sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte II, p. 14; escrito de contestación del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a la demanda presentada el 30 de enero de 2003, p. 73.

⁴ Los peticionarios hemos alegado como violados, en perjuicio de Alfonso Martín del Campo Dodd, los derechos contenidos en los artículos 7, 5, 8, 25, 2 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, asimismo, los contenidos en los artículos 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por otra parte, también hemos solicitado a la Honorable Corte que concluya que el Estado mexicano es responsable por la violación, en perjuicio de los familiares de Alfonso Martín del Campo, a los derechos consagrados en los artículos 5 y 25 de la Convención Americana, así como los relativos a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (específicamente, los artículos 8 y 10).

⁵ Varios instrumentos de derechos humanos han recogido este principio. Por ejemplo, el Preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura reafirma que "todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Asimismo, el Principio 2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señala que "Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los

ocasiones busca un fin, que sólo puede ser logrado al asegurar la total vulnerabilidad de la persona, dejándola en un estado de descontrol emocional y físico.

0000561

No es la intención de los representantes repetir lo manifestado en nuestro primer escrito. Antes bien, solicitamos que la Honorable Corte tenga por reproducidos los argumentos vertidos en esa oportunidad. No obstante ello, y sin el ánimo de contradecir nuestra solicitud, deseamos reiterar que tanto la Corte Interamericana⁶ como otros órganos internacionales de protección de derechos humanos han incluido la teoría de los actos ilícitos continuados y/o sus efectos continuados en distintos fallos y decisiones⁷.

Ahora bien, la discusión respecto de la continuidad de las violaciones (o de sus efectos) de los derechos alegados como violados en este caso no puede ser escindida del análisis relativo a su *quid*. En este sentido, sostenemos que tal estudio no puede ser abordado desde una etapa de excepciones preliminares, porque ello conlleva necesariamente a analizar la naturaleza y el núcleo duro/sustancia del derecho, lo cual corresponde a la etapa de fondo. Esto ha sido sostenido por este Tribunal en el caso *Blake*, en el cual trasladó la discusión de la continuidad de las violaciones y/o sus efectos a la etapa de fondo respectiva.⁸

La Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y ha concluido que "la correcta interpretación y aplicación de las restricciones *ratione temporis* [...] de la Convención dan lugar a preguntas difíciles, tanto legales como de hechos" y que los elementos del caso "están íntimamente ligados con el fondo del caso" por lo que consideró trasladar esa discusión a la relativa del fondo del caso⁹. [Traducción nuestra]

propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

⁶ Corte IDH. Caso *Blake*. Sentencia de Excepciones preliminares de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, Párrs. 40 y 46.

⁷ En relación con los criterios de otros tribunales, la Corte Europea de Derechos Humanos ha recogido este criterio en varios casos. Véase, *inter alia*, Corte EDH. *Loizidou v. Turquía*. Sentencia de 18 de diciembre de 1996, Párr.41; *Papamichalopoulos et al. v. Grecia*. Sentencia de 24 de junio de 1993, Párr. 41 y 43, *in fine*; *Veerer v. Estonia*. Sentencia de 7 de noviembre de 2002, Párr. 55.

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos también ha adoptado el mismo enfoque que las Cortes interamericana y europea. Véanse, entre otras, Comunicación No. 520/1992. E. y A.K. (nombres ficticios) v. Hungría. Resolución de 5 de mayo de 1992. CCPR/C/50/D/520/1992, Párr. 6.4; Comunicación No. 24/1977. Sandra Lovelace v. Canadá. Resolución de 30 de julio de 1981. CCPR/C/13/D/24/1977, Párr. 11 y 13.1. Comunicación No. 196/1985. Ibrahima Gueye et al. v. Francia. Resolución de 6 de abril de 1989. CCPR/C/35/D/196/1985, Párr. 5.3; Comunicación No. 579/1994. Klaus Werenbeck v. Australia. Resolución de 9 de mayo de 1997. CCPR/C/59/D/579/1994, Párr. 4.2. Comunicación No. 5/1977. Luis Maria Bazzano Ambrosini et al. v. Uruguay. Resolución de 15 de agosto de 1979. CCPR/C/7/D/5/1997, Párr. 9; Comunicación No. 11/1977. Alberto Grille Morta et al. v. Uruguay. Resolución de 29 de julio de 1980. CCPR/C/10/D/11/1977, Párr. 14. Comunicación No. 33/1978. Leopoldo Buffo Carballal v. Uruguay. Resolución de 8 de abril de 1981. CCPR/C/12/D/33/1978, Párr. 13.

⁸ Corte IDH. Caso *Blake*, excepciones preliminares, *supra nota* 6, Párr. 39.

⁹ CEDH. Caso *Loizidou v. Turquía*. Sentencia de excepciones preliminares de 23 de marzo de 1995. La Corte estableció:

103. The correct interpretation and application of the restrictions *ratione temporis*, in the Turkish declarations under Articles 25 and 46 (art. 25, art. 46) of the Convention, and the notion of continuing violations of the Convention, raise difficult legal and factual questions.

104. The Court considers that on the present state of the file it has not sufficient elements enabling it to decide these questions. Moreover, they are so closely connected to the merits of the case that they should not be decided at the present phase of the procedure.

0000562

En el mismo sentido, el juez Sergio García Ramírez, en su voto concurrente en el caso de *Las Palmeras*, estableció la diferente naturaleza entre el fin que persiguen las excepciones preliminares y las cuestiones relativas al fondo del asunto. Respecto de las primeras, estimó que "sirven a los objetivos de impedir, detener o limitar el ejercicio de la jurisdicción. En cambio, las excepciones o defensas de naturaleza sustantiva atañen al fondo del asunto, pretenden desvirtuar la pretensión del actor y se proponen sustentar una sentencia desestimatoria."¹⁰

Los efectos y alcances que puede dejar la tortura en una persona son discusiones de fondo. Más aún, es una discusión sustantiva la relativa a si esas secuelas o efectos son atribuibles directamente al Estado mexicano. Por tanto, los representantes de las víctimas y sus familiares solicitamos a la Honorable Corte que incluya esta discusión en la de fondo.

B. Respecto de la competencia *ratione materiae*: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

El Estado mexicano sostiene que la Honorable Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre las violaciones a varios de los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la cual es parte desde antes de que sucedieran los hechos que originaron el presente caso¹¹ y ha concluido, sin mayor abundamiento y razonamientos, que "La aplicación en el presente caso de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura, queda fuera de la competencia de la Honorable Corte Interamericana en razón de que ha quedado fundada la excepción de incompetencia *ratione temporis* interpuesta por el Estado mexicano."¹²

Los representantes, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos solicitado a la Honorable Corte Interamericana que establezca la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos contenidos en los artículos 8 y 10 de este tratado interamericano, los cuales se refieren a la aceptación de la declaración otorgada bajo tortura y a la obligación de las autoridades de investigar de oficio las alegaciones de tortura¹³.

Como se evidencia, el contenido de estos derechos está ligado intrínsecamente al fondo del caso. El análisis que se haga de éstos se vincula a las violaciones procesales en contra de Alfonso

¹⁰ Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, párr. 3, *in fine*. Corte IDH. Caso *Las Palmeras*. Sentencia de Excepciones preliminares de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67.

¹¹ México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 22 de junio de 1987. De acuerdo con tal obligación, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991.

¹² Escrito del Estado mexicano, p. 75.

¹³ Estos artículos señalan:

Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.

Artículo 10. Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

0000563

Martín del Campo, así como a la falta de debida diligencia de haber investigado oficiosamente las torturas alegadas desde un inicio por nuestro representado.

Es necesario, sin embargo, hacer una precisión al respecto. Como ya se ha mencionado anteriormente, los hechos que se denuncian en este caso se perpetraron cuando las Convenciones Americana sobre Derechos Humanos e Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura eran derecho positivo para el Estado mexicano. Por tanto, éste tenía la obligación de garantizar el goce de los derechos y libertades consagrados en ambos instrumentos (art. 1.1 de la Convención Americana y 1 de la Convención sobre Tortura). Esa sola aseveración es suficiente para desechar la excepción del Estado respecto de la aplicación del segundo tratado.

Por tanto, solicitamos a la Honorable Corte que, desestime la excepción preliminar respecto de la competencia *ratione materiae* de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y que los derechos reconocidos por ésta, que alegamos violados, sean discutidos y analizados en la etapa de fondo, puesto que su naturaleza así lo demanda¹⁴.

II. EN RELACIÓN A LA SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR INTERPUESTA POR EL ESTADO, CONCERNIENTE A DIVERSOS ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA ILUSTRE COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado mexicano ha fundado algunas de las excepciones preliminares al procedimiento seguido ante la Ilustre Comisión Interamericana y ha concluido que esta actuó de forma sesgada, violentando el derecho a la defensa del Estado y, por ende, el principio de igualdad procesal de las partes.

Los representantes entendemos que este es un asunto que le compete exclusivamente a la Comisión Interamericana. No obstante ello, queremos referirnos a varios aspectos que no tocan necesariamente el procedimiento o las decisiones adoptadas por la Ilustre Comisión Interamericana vis-à-vis este caso. Antes bien, nuestras observaciones serán encaminadas a varios principios de derecho internacional invocados por el Estado, como lo son: La excepción de la cuarta instancia y la discusión relativa a los recursos internos.

A. Respetto de los recursos internos

En la segunda excepción preliminar planteada por el Estado se hace referencia a las distintas etapas del procedimiento seguido ante la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de la primera etapa (la relativa a la presentación de la queja hasta la adopción del informe de admisibilidad correspondiente), el Estado mexicano alega "una aplicación inadecuada que hizo la Comisión de criterios establecidos por la Honorable Corte, que redundaron en la afectación grave de la objetividad con la que deben decidir los asuntos sometidos a su consideración, así como al derecho del Gobierno mexicano en la etapa de tramitación del asunto ante la misma."¹⁵ Específicamente, el Estado

¹⁴ Existe el precedente en la Corte Europea de Derechos Humanos del caso *Matos e Silva, Lda., and Others v. Portugal*, en el cual este tribunal difirió el análisis de competencia en razón de la materia al fondo CEDH. *Caso Matos e Silva, Lda., and Others v. Portugal*. Sentencia de 16 de septiembre de 1989, Párr. 59, *in fine*.

¹⁵ Escrito de respuesta del Estado, página 76.

0000564

mexicano habla de ocultamiento de información por parte de la Ilustre Comisión la cual era "relevante para la defensa de éste"¹⁶, con lo cual se le privó de la oportunidad de plantear objeciones manifiestas al cumplimiento del artículo 46.b.1 de la Convención Americana"¹⁷, y arriba a las siguientes conclusiones:

- a. La Comisión Interamericana violó la disposiciones de la Convención Americana sobre admisibilidad de peticiones, del Reglamento que rigen su actuación en perjuicio de la defensa del Estado, entre otros los artículos 32 a 37, dejando de lado la objetividad con que debe conducirse y convirtiéndose virtualmente en parte activa de la defensa del peticionario desde las primeras etapas de tramitación del asunto, al percatarse de las irregularidades manifiestas que presentaba inicialmente su petición y simplemente esperando de manera paciente a que los peticionarios intentaran impugnar, cuando su voluntad así los dispusiera, la cosa juzgada representada por la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal fue dictada el 17 de agosto de 1993, no obstante que ya les había sido desfavorable el amparo indirecto interpuesto en 1997.
- b. La Comisión no observó las exigencias del plazo razonable en las diligencias previas a la notificación de la supuesta queja al Estado el 4 de noviembre de 1999, puesto que retuvo la queja inicial por más de un año tres meses hasta que la comunicó formalmente el 13 de julio de 1998, con lo cual también incurrió en actos arbitrarios y contrarios a la certeza y seguridad jurídicas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
- c. La CIDH omitió informar en su momento debidamente al Estado y remitirle los elementos que ahora presente como anexos a su demanda, por lo que es hasta ahora que el propio Estado conoce el manejo parcial que la dio la CIDH a una queja improcedente.
- d. La actuación arbitraria de la CIDH se suma a la desplegada indebidamente por los peticionarios originales, quienes esperaron cerca de seis años para plantear un recurso extraordinario y, con esto, intentar de manera artificiosa e infundada que el presente asunto alcanzara al menos el ámbito de competencia temporal de la honorable Corte Interamericana, lo cual también ha sido combatido por el Estado.¹⁸

Como se ha mencionado anteriormente, los representantes consideramos que varias de las acusaciones vertidas por el Estado solamente podrán ser aclaradas por la Ilustre Comisión. Ejemplo de ello, son las tres primeras conclusiones a las que el Estado llega. Por tanto, nos referiremos a la última anotación del Estado, la cual se refiere exclusivamente a los recursos internos.

En este sentido, resulta procedente mencionar el informe de admisibilidad de la Ilustre Comisión, en el cual se estableció la renuncia tácita por parte del Estado mexicano a plantear "la excepción prevista en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana"¹⁹, limitándose a manifestar, hasta la tercera comunicación dirigida a la Ilustre Comisión, que "como resultado de la audiencia ante esa Honorable Comisión el 11 de octubre de 2000, quedó de manifiesto que había recursos de jurisdicción interna que no habían sido agotados en el presente asunto"²⁰.

En virtud de ello, la CIDH decidió que

¹⁶ Ibidem, página 77.

¹⁷ Ibidem, página 78.

¹⁸ Ibidem, pp. 81-82.

¹⁹ CIDH. Caso 12.228. Alfonso Martín del Campo Dodd (México). Informe de admisibilidad No. 81/01. 10 de octubre de 2001, Párr. 15. Este documento se ha adjuntado a la demanda de la Comisión bajo el Anexo No. 7.

²⁰ Ibidem., Párr. 15.

0000565

En la petición bajo estudio, la CIDH ha establecido la renuncia tácita del Estado mexicano a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. En tal sentido, la CIDH observa que la comunicación original del señor Martín del Campo Dodd fue recibida el 13 de julio de 1998, con anterioridad a la interposición del recurso de reconocimiento de inocencia. En virtud de las circunstancias particulares de la petición bajo análisis, la CIDH considera que fue presentada dentro de un plazo razonable.²¹

Uno de los principios de derecho internacional generalmente aplicados es el referente al *estoppel*, el cual tiende a asegurar la igualdad entre las partes durante el proceso internacional, al regular que una de ellas no puede interponer una excepción en una etapa posterior al procedimiento, cuando no lo hizo en una instancia anterior. En palabras de la Honorable Corte en el caso *Neira Alegría y Otros v. Perú*, "cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunde en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del *estoppel*, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la regla de *non concedit venire contra factum proprium*."²² [Negritas y cursivas en original] En este caso, la Corte desechó la excepción interpuesta por el Estado peruano en virtud de que éste "ha[bía] sostenido, en cuanto al agotamiento de los recursos, dos afirmaciones contradictorias acerca de su derecho interno e independientemente de la veracidad de cada una de ellas, esa contradicción afecta la situación procesal de la parte contraria."²³

De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la oportunidad para renunciar a la excepción de no agotamiento de recursos internos puede ser entendida por una conducta expresa o por la actitud tácita del Estado en cuestión²⁴. En el caso que el Estado haya interpuesto la excepción al agotamiento de los recursos internos, la Corte ha establecido un *test* al cual el primero se deberá atener: en primer lugar, el Estado deberá plantear de manera clara²⁵ y oportuna²⁶, dentro de las primeras etapas del procedimiento la excepción, lo cual deberá ir seguido por "el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad".²⁷

²¹ Ibidem, Párr. 20.

²² Corte IDH. Caso *Neira Alegría y Otros*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 11 de diciembre de 1991. Serie C No. 13, Párr. 29.

²³ Ibidem, Párr. 29, *in fine*.

²⁴ Ibidem, Párr. 30, *in fine*. Cfr. *Asunto de Viviana Gallardo y otras*. Decisión de 13 de noviembre de 1981, No. G 101/81. Serie A, Párr. 26; Caso *Gangaram Panday*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, Párr. 38.

²⁵ La Corte también habla de que la excepción se haya interpuesto de una manera expresa dentro de las primeras etapas del procedimiento. Ver *Caso de la Comunidad Comunidad Mayagna Sumo (Awás Tingni)*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, Párrs. 54, 55.

²⁶ Corte IDH. Caso *Neira Alegría*, excepciones preliminares, *supra nota* 22, Párr. 30. Cfr. *Caso de la Comunidad Mayagna Sumo (Awás Tingni)*, *Ibid.*, Párr. 53; *Caso Castillo Páez*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, Párr. 40; *Caso Loayza Tamayo*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25, Párr. 40; *Caso Castillo Petrucci*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr. 56.

²⁷ Corte IDH. *Caso Neira Alegría*, excepciones preliminares, *supra nota* 22, Párr. 30, *in fine*, citando los *Casos Velásquez Rodríguez*. Sentencia de Excepciones Preliminares de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, Párr. 88; *Caso Fairén Garbí y*

0000566

No pasa desapercibido para los representantes la ambivalencia de la postura y los argumentos que plantea el Estado respecto de los recursos internos. Por una parte se refiere a la extemporaneidad de la presentación de la queja ante la Ilustre Comisión Interamericana²⁸ y, por la otra, se contradice al manifestar que no se habían agotado las instancias internas cuando el caso se había presentado ante la Comisión²⁹.

Por otra parte, el Estado no sólo ha interpuesto una excepción preliminar de forma extemporánea e inoportuna; sino que también está cuestionando la imparcialidad de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos al emitir el informe de admisibilidad correspondiente. Al respecto, nos parece oportuno citar el voto razonado del juez Cançado Trinidad, en el caso *Gangaram Panday*, quien señaló que "La cuestión preliminar (procesal) de admisibilidad es una e indivisible: así como se consideran definitivas e inapelables las decisiones de la Comisión de inadmisibilidad de peticiones o comunicaciones, el rechazo por la Comisión de una objeción de no agotamiento de recursos internos debería asimismo considerarse definitiva y no susceptible de plantearse de nuevo por el Gobierno demandado en el procedimiento subsecuente ante la Corte."³⁰ De acuerdo con lo señalado por el juez Cançado, si la Corte entrara a analizar la admisibilidad del caso nuevamente, no sólo se incurriría en un desequilibrio procesal de las partes³¹ y se estaría contrariando el principio de economía procesal³², sino que se debilitaría la función de la Comisión Interamericana, ya que podría darse el caso de que la resolución emitida por ésta fuera totalmente contraria a la dictada por la Corte. En definitiva,

Sollís Corrales. Sentencia de Excepciones Preliminares de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, Párr. 87; y Caso Godínez Cruz. Sentencia de Excepciones Preliminares de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, Párr. 90.

²⁸ Ello, en virtud de que el Estado entiende que la resolución que terminaba el trámite interno era la emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (de fecha 17 de agosto de 1993). Específicamente, el Estado asevera que

En efecto, con relación a la extemporaneidad de la petición, si se toma en cuenta que la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue dictada el 17 de agosto de 1993, el plazo de seis meses para presentar la queja respectiva en el sistema interamericano habría vencido inevitablemente el 17 de febrero de 1994. [Escrito de respuesta del Estado, p. 77]

²⁹ El Estado ha manifestado que

[U]n año antes de decidir la admisibilidad de la petición y en actuaciones posteriores del Estado y los peticionarios, la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal que recayó al recurso excepcional de reconocimiento de inocencia planteado por los peticionarios, podía ser impugnada *per se* en sus aspectos constitucionales y legales, a través del juicio de amparo indirecto ante un juez de Distrito y, la decisión de peste a su vez podría atacarse jurídicamente en apelación, de la cual conocería siguiendo las reglas de competencia de ese entonces, la Suprema Corte de Justicia del a nación o un tribunal colegiado de circuito.

Esto fue aceptado por los presentes en la audiencia, quienes no rebatieron de manera suficiente dicho aspecto y, además, en efecto, los peticionarios presentaron con varios meses de retraso después de la celebración de dicha audiencia el amparo señalado y la apelación (recurso de revisión) que indicó el propio Estado. [Escrito de respuesta del Estado, pp. 85, 86. Resaltado fuera del original]

³⁰ Voto Razonado del Juez Antônio Augusto Cançado Trinidad. Caso *Gangaram Panday*, excepciones Preliminares, *supra nota* 27, Párr. 6.

³¹ Consideramos relevante citar la pregunta que surgen de varios votos razonados del Juez respecto del posible desequilibrio de las partes en el que se incurriría si se revisara nuevamente la admisibilidad: "¿Por qué se le permitiría al Gobierno demandado impugnar ante la Corte el rechazo por la Comisión de una objeción de no agotamiento, si a la presunta víctima no se le permitiría impugnar ante la Corte el sostenimiento por la Comisión de una objeción de no agotamiento? Eso parece constituir una injusticia considerable, en detrimento de la presunta víctima." *Ibidem.*, Párr. 8, *in fine*. Ver igualmente los párrafos 5 y 13. *Cfr.* Casos *Loayza Tamayo* y *Castillo Páez*, *supra nota* 26, Párr. 7, *in fine*. De igual forma, ver párrafos 3, 4 y 8.

³² En este sentido, el actual presidente de la Corte estimó que "[H]abría además razón para evitar una labor repetitiva y lenta de la Corte, no sólo en el procedimiento sobre el fondo, sino también en el manejo de las pruebas: no sería, en absoluto, aconsejable, extender tal repetición regularmente también a cuestiones de admisibilidad, sin ningún efecto tangible o real sobre la protección de os derechos humanos". Caso *Gangaram Panday*, excepciones preliminares, Párr. 9.

0000567

la Corte no debe analizar la admisibilidad, sino "concentrarse más en el examen de cuestiones de fondo para poder cumplir con mayor celeridad y seguridad su rol de interpretar o y aplicar la Convención Americana, determinando la ocurrencia o no de violaciones de la Convención Americana y sus consecuencias jurídicas [puesto que no es] no es [...], un tribunal de recursos o apelaciones de decisiones de admisibilidad de la Comisión".³³

El Estado tuvo la oportunidad de brindar sus observaciones respecto de los recursos internos en el presente caso, lo cual no hizo hasta en etapas posteriores al inicio del procedimiento³⁴. Ello ha sido ratificado por el informe de admisibilidad de la Ilustre Comisión. En virtud de ello, los representantes solicitamos a la Honorable Corte que deseche la excepción preliminar interpuesta por el Estado mexicano respecto de la violación al derecho a la defensa para interponer excepciones en el procedimiento ante la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

B. Con relación a la fórmula a la "cosa juzgada" y a la cuarta instancia

Otra de las excepciones preliminares interpuestas por el Estado mexicano se refiere a la teoría de la cuarta instancia. En específico, afirma que

La posición del Estado en este punto es perfectamente compatible con su afirmación del carácter de cosa juzgada del asunto, los peticionarios pretenden hacer uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos para cuestionar la actuación y las decisiones de los órganos de procuración e impartición de justicia mexicanos, a efecto de intentar como fin último, sin importar los subterfugios que utilicen, la excarcelación de una persona declarada por un tribunal independiente e imparcial como plenamente (*sic*) responsable del dantesco homicidio del joven matrimonio formado por su propia hermana, Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba en 1992 [...].

Las decisiones adoptadas por un órgano jurisdiccional en el orden interno que han adquirido el carácter de cosa juzgada, no pueden ser alteradas o modificadas más que por las vías y los medios previstos para tal efecto. Dichas decisiones son emitidas de conformidad con los márgenes de valoración que el ordenamiento ha considerado como válidos, de conformidad con los elementos presentados y probados legalmente por las partes en un proceso.³⁵

Más adelante, estima que

Si un órgano internacional pretende analizar la compatibilidad de lo decidido o actuado por un órgano jurisdiccional con un tratado internacional de derechos humanos, no debe hacerlo a la ligera ni aislar un acto del proceso en específico, sino analizar el proceso *in toto*, esto es, el conjunto de constancias procesales que permitan *reconstruir* la actuación,

³³ Voto Razonado del Juez Antonio Augusto Cançado Trinidad. Casos Castillo Páez y Loayza Tamayo, excepciones preliminares, *supra nota 29*, Párr. 8, *in fine*.

³⁴ En efecto, el Estado mexicano en el caso que nos compete no fue sino hasta el 21 de abril de 2001 que por primera vez interpone esa excepción ante la Comisión Interamericana, lo que significa que transcurrieron 2 años 9 meses desde la presentación de la primera comunicación de Martín del Campo hasta que el Estado la opusiera. En el caso *Awas Tingni* antes citado, la Honorable Corte determinó la renuncia tácita del recurso por parte de Nicaragua fue poco más de 2 años el tiempo que transcurrió en el que el Estado interpuso la excepción desde la presentación de la petición inicial ante la Comisión.

³⁵ Escrito del Estado, pp. 83 y 84.

0000568

fundamentación y valoración realizada por el juez o tribunal, a partir de aquellos elementos presentados por las partes de conformidad con las reglas jurídicas vigentes en ese momento.³⁶

Los representantes estamos de acuerdo con la segunda afirmación del Estado. Consideramos que ésta subsana lo manifestado en páginas anteriores de su escrito y que ha sido citado en párrafos anteriores. Ello también ha sido sustentado por la Honorable Corte, quien ha señalado que

El esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos. Al respecto, la Corte Europea ha señalado que se deben considerar los procedimientos como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de apelación, y que la función del tribunal internacional es determinar si la integralidad de los procedimientos, así como la forma en que fue producida la prueba, fueron justos [...].³⁷

En relación a la fórmula de la *cuarta instancia* alegada por el Estado mexicano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un parámetro mediante el cual no se estaría contraviniendo la regla de la cuarta instancia. En este *test*, la Comisión se ha estimado competente para "revisar las sentencias dictadas por los Tribunales Nacionales que actúan en la esfera de su competencia aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que se considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención"³⁸. Esto es, que está dentro de las facultades de la Comisión "declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiera a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención."³⁹ (Resaltado fuera del original)

Esta fórmula ha sido retomada por la Honorable Corte en el caso *Villagrán Morales y Otros*, en el cual estimó que:

Esta Corte considera que la demanda presentada por la Comisión Interamericana no pretende la revisión del fallo de la Corte Suprema de Guatemala sino que solicita que declare que el Estado violó varios preceptos de la Convención Americana por la muerte

³⁶ Escrito del Estado, p. 85.

³⁷ Corte IDH. Caso *Villagrán Morales y Otros* (Caso de los "Niños de la Calle"). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, Párr. 222.

³⁸ CIDH. Caso *Marzióni v. Argentina*. Informe de inadmisibilidad No. 39/96, de 15 de octubre 1996, Párr. 50. *Cfr., inter alia*, Caso 11.137. *Juan Carlos Abella v. Argentina*. Informe de fondo No. 55/97, de 18 de noviembre de 1997, Párr. 141; Caso *Jorge E Benavides v. Colombia*. Informe de inadmisibilidad No. 34/97, de 3 de octubre de 1997, párr. 23.

³⁹ La Comisión estableció que

Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en si mismo, la petición debe ser rechazada conforme a la fórmula arriba expuesta. La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención, pero no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.

[Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Casos *Abella y otros v. Argentina*, Párr. 142 y *Marzióni v. Argentina*, Párr. 51, *Ibidem*.]

de las citadas personas, que atribuye a miembros de la policía de ese Estado y que por lo tanto no existe responsabilidad de éste.⁴⁰

0900569

Los criterios aplicados por la Ilustre Comisión y la Honorable Corte en los casos antes citados se actualizan en el presente asunto, ya que este tribunal sí es competente para analizar y determinar si los tribunales nacionales en el ejercicio de sus facultades violaron algún derecho consagrado en los instrumentos interamericanos de los cuales México es parte.

Analizar el proceso judicial en el caso que nos ocupa implica —una vez más— estudiar la sustancia del caso, específicamente las garantías judiciales y la protección judicial garantizadas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al igual que los artículos 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de las cuales México es parte. Lo cual es coincidente con la jurisprudencia de la Honorable Corte en la materia.⁴¹

Por tanto, los representantes solicitamos igualmente a la Honorable Corte que difiera esa discusión al fondo del asunto.

III. Respeto de las demás afirmaciones y argumentos del Estado en este caso

Como lo manifestamos al inicio, los representantes entendemos que este escrito se limitó a aportar nuestras observaciones respecto de las excepciones preliminares planteadas por el Estado. Sin embargo, nos preocupan las manifestaciones y argumentos que a lo largo de su escrito ha realizado el Estado. Estas se vinculan, *inter alia*, con los hechos del caso, así como con las cuestiones de derecho y de reparaciones.

En este sentido, los representantes hemos invocado el artículo 38 del actual Reglamento de la Honorable Corte⁴². Consideramos que el espíritu de esta previsión radica en garantizar a las partes, antes del procedimiento oral, el derecho a precisar aspectos respecto de los cuales se ha pronunciado otra de las partes en el proceso y que su aclaración se hace necesaria, para mejor ilustración, a fin de que este Tribunal emita la resolución correspondiente.

Por tanto, solicitamos a la Honorable Corte que, de conformidad con el artículo 38 de su Reglamento y para mejor proveer, nos otorgue la oportunidad de presentar un escrito con nuestras observaciones a las manifestaciones del Estado, excluyendo lo concerniente a las excepciones preliminares.

⁴⁰ Corte IDH. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los "Niños de la Calle"). Sentencia de Excepciones Preliminares de 11 de septiembre de 1997. Serie C No. 32, Párr. 18.

⁴¹ En el caso *Villagrán Morales y Otros*, la Corte estimó que el análisis del proceso judicial correspondía al fondo del caso:
18. Esta Corte considera que la demanda presentada por la Comisión Interamericana no pretende la revisión del fallo de la Corte Suprema de Guatemala sino que solicita que se declare que el Estado violó varios preceptos de la Convención Americana por la muerte de las citadas personas, que atribuye a miembros de la policía de ese Estado y que por lo tanto existe responsabilidad de éste.

19. Por lo tanto, y como lo afirma la Comisión al contestar el escrito de excepciones preliminares, se trata de una cuestión que corresponde al fondo de este asunto, y, por ello, la Corte considera que la excepción no es preliminar sino más bien cuestión efectivamente vinculada al fondo de la controversia.
[Ibidem., Párrs. 18 y 19]

⁴² Ver nota al pie No. 1.

0000570

IV. Puntos Petitorios

Por todo lo antes expuesto, solicitamos a la Honorable Corte:

1. Que rechace la excepción relativa al agotamiento de los recursos internos, que se vincula con el principio del *estoppel*, en virtud de la extemporaneidad con la que fue interpuesta.
2. Que, de conformidad con el artículo 36.6 de su Reglamento, difiera la resolución de las demás excepciones preliminares interpuestas por el Estado mexicano en la relativa al fondo del caso, puesto que las primeras se relacionan intrínsecamente con éste.
3. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de su Reglamento, nos otorgue la oportunidad de presentar nuestras observaciones al escrito del Estado, relativas a asuntos de hecho, fondo y reparaciones.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestras muestras de la más alta consideración y estima.

P.A. *Viviana Krsticevic*
Viviana Krsticevic
[Redacted]

Juan Carlos Gutiérrez
Juan Carlos Gutiérrez
[Redacted]

Alejandra Nuño
Alejandra Nuño
[Redacted]

P.A. *Nahveli Ortiz*
Nahveli Ortiz
[Redacted]